

Opinión

EN CARICATURAS

Conteo y re...con...te...o



Confesionario



James el ‘Asombroso’ Randi

Hace unos días, la prensa trajo la noticia de la muerte del mago James Randi. No le gustaba el apelativo de mago; decía que trató muchas veces en su juventud de usar hechizos y encantamientos para superar las leyes de la naturaleza, pero que nunca le resultó. Así, prefería anunciarse como prestidigitador e ilusionista y reconocía que se basaba en el subterfugio, la astucia y una buena percepción de la psicología de su público. Su nombre artístico fue James el ‘Asombroso’ Randi.

Cuando cumplió sesenta años decidió que no iba a actuar más, y que se iba dedicar a desenmascarar a quienes pretendían tener poderes paranormales. Con Carl Sagan y otros fundó el CSICOP (Comité para la Investigación Científica de Reclamos Paranormales) y se dedicó a perseguir supercherías. En 1964 ofreció un premio de diez mil dólares a quien lograra mostrar un hecho paranormal que él no pudiera desenmascarar; fue subiendo la oferta hasta el millón de dólares. Se retiró en 2015, sin que nadie se hubiera ganado el premio.

Desenmascará al famoso Uri Geller mostrando cómo se puede doblar cucharitas y despertar relojes. Eso le costó varias demandas. Otro caso notable fue el del televangelizador Peter Popoff. Ese predicador recogía buenos fondos haciendo curaciones milagrosas y espectáculos de adivinación. Lograba que paráliticos se pararan de sus sillas de ruedas y hacía cirugías a distancia. Leía la mente



Desenmascarando poderes paranormales
Moisés Wasserman

y adivinaba la dirección exacta, el número de teléfono y los males que aquejaban a los feligreses presentes. Randi, con un par de expertos en electrónica, logró captar la señal de radio que la esposa de Popoff transmitía desde el archivo de la parroquia a su audífono. Para completar, infiltró a un hombre disfrazado de mujer a quien Popoff, por una módica suma, operó y curó de un cáncer de cuello uterino. El asistente del predicador explicó después lo del audífono diciendo que casi siempre Popoff recibía información celestial, pero a veces no, y entonces debía ayudarse un poco con otros medios.

El caso de las mujeres magnéticas de Hungría, a las que se les pegaban en la frente toda clase de objetos (incluso no metálicos) logró desenmascararlo pidiéndoles amablemente a las señoras que permitieran que les lavara la frente con agua y jabón. Ellas se retiraron airadas afirmando que “el magnetismo y el agua no se mezclan”. Puso en aprietos a unos ‘za-

hories’ (que pretenden tener capacidad para detectar agua subterránea) pidiéndoles que le mostraran un lugar totalmente seco. Resulta que agua hay casi en cualquier sitio si se perfora lo suficiente; por tanto, tenían asegurado un buen porcentaje de aciertos, no así cuando los puso a detectar un lugar sin agua.

También incurrió en el desenmascaramiento de pseudociencias. En 1988, un científico del Instituto Pasteur publicó en la revista *Nature* un artículo con el que demostraba “la memoria del agua”, que es la tesis fundamental de la homeopatía. El experimento demostraba el reconocimiento, con anticuerpos, de una sustancia en soluciones tan diluidas que no podían contener teóricamente ni siquiera una molécula. Randi participó en la repetición del experimento, pero codificó los tubos, revolvió los de agua con memoria y los de agua normal, y el código lo puso en un sobre que pegó al techo del laboratorio. El experimento fracasó, demostrando que cuando los investigadores no sabían dónde estaba el agua homeopática, esta desgraciadamente perdía la memoria.

Entre las organizaciones de escépticos, muchos no compartieron la agresividad de sus métodos. Él se definió a sí mismo como un hombre furioso, y eso le trajo enemistades, pero también mucho agradecimiento de quienes preferimos la verdad, aunque se vea menos bonita que los trucos del ilusionista.

@mwassermannl



¿Otra iniciativa fugaz?
Stefano Farné

¿Formalización o discriminación laboral?

Aunque bien intencionado, el recién emitido decreto 1174, que reglamenta el acceso y la operación del Piso de Protección Social (PPS), podría generar más problemas de los que pretende resolver.

Según el Gobierno, el PPS permitirá la inclusión en la protección social de las personas que, por trabajar menos que la jornada completa, devengan ingresos inferiores al salario mínimo mensual. Esto a través de un mecanismo que entregue beneficios en materia de salud, protección para la vejez y aseguramiento ocupacional diferentes -inferiores- a los de la seguridad social contributiva a la cual deben aportar los trabajadores de ingresos iguales o superiores al salario mínimo. La afiliación al PPS es obligatoria para los trabajadores dependientes y los prestadores de servicios laborales.

En la práctica, la implementación del PPS requiere redefinir relaciones institucionales e introducir ajustes técnicos de servicios ya existentes -esto es, a la salud subsidiada, los beneficios económicos periódicos (BEP) y el microseguro que cubre algunos riesgos de invalidez y el fallecimiento del titular y que en el nuevo PPS se denomina seguro inclusivo- que deberán resolverse antes de su entrada en vigor en febrero de 2021.

Durante este tiempo habrá que evaluar también si, así como está concebido, el mecanismo del PPS no lleva a una discriminación en el mercado de trabajo, proporcionando una protección diferencial -inferior- a los trabajadores que se pretende beneficiar.

De hecho, la salud subsidiada, a diferencia de la contributiva, no da derecho a prestaciones económicas; los BEP, a diferencia del Sistema General de Pensiones, no dan derecho a pensiones de sobrevivientes, y el microseguro (o el nuevo y mejorado seguro inclusivo) no ofrece la misma cobertura que las administradoras de riesgos laborales (ARL) del régimen contributivo aseguran en materia de riesgos ocupacionales.

Para entender estas diferencias es ilustrativo hacer un ejemplo. Supongamos que una empresa contrata a dos mujeres para ofrecer a sus empleados el servicio de cafetería. A una mujer -llamémosla trabajadora A- se la contrata de tiempo completo, se le paga un salario mínimo y se la afilia al sistema de seguridad social contributivo. A la otra -llamémosla trabajadora B- se la contrata de medio tiempo, se le paga medio salario mínimo y se la afilia al PPS.

Ahora bien, supongamos que las dos mujeres queden embarazadas. La trabajadora A, en el momento del nacimiento de su hijo, tendrá derecho a la licencia de maternidad; la trabajadora B, no.

Asimismo, si por alguna desafortunada razón las dos mujeres mueren, los sobrevivientes -por ejemplo, los hijos menores de edad- de la trabajadora A tendrán derecho a una pensión, mientras que los sobrevivientes de la trabajadora B a lo sumo recibirán la indemnización estipulada por un seguro de vida.

De la misma forma, si ambas mujeres sufren un accidente laboral, la trabajadora B siempre recibirá una indemnización menor que la trabajadora A y nunca percibirá una pensión de invalidez como su colega en el caso de graves infortunios.

La pregunta más obvia que se deriva de esta comparación es: ¿en qué se sustentan estas diferencias, tan sustanciales, entre las dos trabajadoras? En la práctica, ambas desarrollan las mismas labores, y la única diferencia existente entre las dos es que una trabaja de tiempo completo y su empleador está obligado a afiliarla a los regímenes contributivos, mientras que la otra trabaja menos horas semanales y el mismo empleador debe contribuir al PPS.

¿Es admisible una discriminación de semejantes proporciones? ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que los jueces obliguen a reconocer los mismos derechos a las dos mujeres? ¿Será que el remedio para la informalidad laboral propuesto por el Gobierno resultará en otra iniciativa fugaz?

* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia

Grito por la justicia

En estos días, cuando se cumple otro aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, abundan las publicaciones sobre la tragedia que conmovió al país hace 35 años y cuyo impacto solo menguó ante el golpe de otra catástrofe, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que sepultó a Armero. A pesar de su gran número de víctimas, el desastre natural no impactó la conciencia nacional con la misma fuerza ni ha permanecido en la memoria colectiva tanto tiempo como la calamidad provocada por la confrontación entre colombianos en ese lejano y oscuro noviembre.

Este año, como en los anteriores, la película se repite y los relatos que recrean la toma y la retoma del Palacio dan la impresión de llover sobre mojado. Se podría pensar que todo está dicho sobre ese dramático episodio, único en el mundo, pero entre nosotros uno más en la lista de desgracias que llenan nuestra historia, del que se puede decir como de tantos otros, parafraseando una célebre frase de Winston Churchill, que sigue siendo un misterio envuelto en un enigma.

A más de tres décadas de distancia, la justicia sigue en deuda con muchas de las víctimas de la carnicería que dejó un centenar de muertos, entre ellos nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y un número de desaparecidos que todavía es materia de discusión. Las circunstancias del ataque del M-19 y la reacción del Ejército, así como el papel que jugó el presidente Belisario Betancur, se



Un testimonio desgarrador
Leopoldo Villar Borda

guirán dando material a periodistas, escritores, pintores y cineastas. Algunas dudas serán resueltas y otras pasarán al olvido. Lo que no desaparecerá es el dolor de las víctimas.

A diferencia de las cosas que siguen en la oscuridad y que tal vez se lleguen a saber tarde o temprano, los testimonios de ese dolor mantienen viva la memoria de los hechos que lo causaron y deberían aumentar la solidaridad con las víctimas que necesita una sociedad tan golpeada por la adversidad como la nuestra. Por esto es tan valioso el que ofrece el libro *Mi vida y el palacio*, de Helena Urán Bidegain, una de las hijas del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Urán Rojas, la verdad de cuya muerte el día del holocausto sigue en la oscuridad.

Es un relato desgarrador sobre lo que significaron para ella la pérdida del padre cuando tenía diez años y la incertidumbre en los años que siguieron, a las que se añadieron el infortunio del exilio

y la desesperanza de hoy en día porque aún no se han aclarado las circunstancias de su desgracia. Es también una evocación de la tragedia vivida por miles de familias en el largo penar de la vida colombiana, sobre todo en el último siglo.

¿Cómo es posible que la justicia no haya podido correr el velo que cubre un episodio tan tenebroso como la muerte del magistrado Urán, quien salió vivo del infierno en el que se convirtió la sede del Poder Judicial para caer en otro infierno donde perdió la vida? La autora recuerda la angustia que sintió como niña porque su padre no volvió, la tristeza de su madre y sus tres hermanas, la lucha que libraron después en busca de la verdad y las amenazas que recibieron y que las obligaron a salir al exilio.

Todo esto, mientras la justicia avanzaba lentamente en la investigación que concluyó con la condena -después revocada- del coronel Alfonso Plazas Vega y la de su superior inmediato, el general Jesús Armando Arias Cabrales -hoy suspendida-, por la desaparición de doce personas en la retoma del Palacio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba al Estado colombiano por los mismos hechos.

Helena Urán no ha perdido la esperanza de que se aclare el caso de su padre. Tal vez su libro ayude a acelerar la investigación. Pero, aun si esto no ocurre, sus páginas no deben pasar inadvertidas. Son un espejo en el que debe mirarse la sociedad colombiana para no olvidar a las víctimas y para no cejar en el empeño de que algún día en el país impere la justicia.